



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

Expediente: 43846/2015

Autos: DON MELQUIADES S.R.L. c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA

Buenos Aires,

AUTOS Y VISTOS:

I. Que contra la resolución del organismo nro. 126/2013 (DV RRTU) del 7.11.2013, que desestima la impugnación del contribuyente contra la deuda y multa determinada bajo la Orden de Intervención N° 635.127 en concepto de Aportes y Contribuciones al Régimen de la Seguridad Social por los períodos 4/07 a 7/2011, se dirige el recurso de la parte actora de fs. 433/446.

Elevadas las actuaciones, con carácter liminar a la apertura formal de la instancia –habiéndose interpuesto dentro del plazo previsto por el art. 9 de la ley 23.473, modificado por las leyes 24.463 y 26.063-, corresponde verificar el cumplimiento del recaudo establecido por el art. 12 de la ley 21.864, 26 inc. b) de la ley 24463 y arts. 15 segundo párrafo de la ley 18.820 y 6 punto 1) de la resolución 877/92 (ANSeS).

A propósito de ello, en el escrito de recurso, el apelante plantea la exención de cumplimiento de la mentada obligación atento la imposibilidad de afrontar el pago del “solve et repete”, aduciendo la desproporcionalidad con la capacidad económica de la empresa.

El Alto Tribunal ha sostenido en reiteradas oportunidades, que si bien el art. 15 de la ley 18.820 impone un requisito indispensable para la viabilidad del recurso de apelación, sin que ello importe una restricción inconstitucional a las garantías de igualdad y de defensa en juicio (Fallos 155:96; 162:363; 235:479; 238:418; 247:181; 261:101; y sus citas: 288:287; 296:57 entre otros), existen situaciones que admiten la apertura de la instancia judicial sin el mentado depósito. Así ha considerado que se enmarcan en la hipótesis de excepción: a) desproporcionada magnitud del monto del depósito con relación a la concreta capacidad económica del apelante, que torna ilusorio su derecho en razón del importante desapoderamiento que podría significar su cumplimiento (CSJN., Fallos 247:181; 250:208 y fallo allí citado; ídem Mussio Hnos S.A. s/Impugnación actas de inspección”, sent. del 25.3.86, y específicamente, dictamen del señor Procurador General de la Nación Argentina del 26/7/85, consid. IV); b) el supuesto de monto excepcional y falta comprobada e inculpable de los medios para enfrentar su erogación (Fallos 256:38; 261:101); y c) cuando a través del requerimiento de esta clase de recaudos se revele en modo inmediato e inequívoco un propósito persecutorio o desviación de poder de parte de los órganos administrativos de aplicación (Fallos 288:287 consid. 10).

Que en tal sentido, surge de la resolución obrante a fs. 544/548 que el propio organismo de recaudación a partir del informe realizado por la División Fiscalización N°3, considera que el contribuyente no dispone de fondos suficientes para cumplir con el pago del depósito previo, afirmación que se condice con las constancias arimadas a la causa, por lo que corresponde encuadrar a la actora en los supuestos de excepción aludidos y declarar la admisibilidad formal del recurso.

II. Surge de las constancias de autos que las presentes actuaciones tienen su inicio en la denuncia presentada ante la AFIP por la Delegación Provincial de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) y de la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (UATRE), para que se intime a Don Melquiades S.R.L. a la inmediata “regularización de la situación laboral de sus dependientes y el pago de los Aportes y Contribuciones para el S.S.S. (ANSeS u O.S.)”. A tal fin, adjuntan copia autenticada del acta labrada por UATRE y OSPRERA.

En virtud de ello, el organismo de recaudación con fecha 7/9/11 efectuó la notificación y apertura del caso, al tiempo que requirió las constancias de altas y bajas de la firma, L.R.U., y recibos de sueldo referidos al listado de empleados para concluir, a partir de ello, que los trabajadores individualizados por los denunciantes, no se encontraban incluidos en las DDJJ presentadas por el contribuyente.

Que en su descargo, la apoderada de Don Melquiades S.R.L. manifestó que las personas relevadas en el formulario 8016 no son empleados en relación de dependencia de su representada, puesto que las mismas se desempeñan como Asociados de la Cooperativa de Trabajo Huentala con quien se relaciona en virtud de la locación de servicios con dicha cooperativa tal como surgiría del contrato acompañado y las facturas extendidas durante todo el período involucrado (05/2007 al 07/2011). Solicita a la AFIP se cite a la Cooperativa Huentala a fin de verificar la vinculación de sus asociados.

Los argumentos expuestos fueron desestimados pues la inspección no los consideró como un descargo valedero ya que a la cooperativa le fue retirada la autorización para funcionar como tal por el INAES, dado que actuaba como una pantalla para defraudar a trabajadores golondrina. Además refiere a un fallo de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que confirmó la decisión tomada por el citado organismo.

Que la cuestión central que ha de abordarse en el caso bajo estudio, no se circunscribe al supuesto obrar ilegítimo de la cooperativa que al momento de formularse el cargo se encontraba habilitada por el INAES y sus asociados desarrollaban la actividad en distintos lugares, sino que el eje central, es determinar si existió dependencia de aquellos con la firma aquí actora.

En este sentido, no ha de perderse de vista que el actuar de la administración no puede subsumirse en una mera revisión contable, pues ello importaría una inversión en la carga de la prueba (cfr. Wassner, Roberto, "Trámites, procedimientos, recursos administrativos y judiciales en previsión social, pág. 104 y ss.). La presunción "juris tantum" de la existencia de la relación laboral en sentido estricto, como tal, debe verificarse al extremo, pues ello fundará una decisión administrativa de neto corte punitivo. En ese actuar debe imperar el principio de verdad material o real, llevando a cabo las medidas que se consideren conducentes para incursionar a fondo en la realidad económica analizada (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 29.05.97, "Cooperativa de Provisión para Puesteros La Armonía").

Así, el proceso administrativo debe brindar protección jurídica al particular a la par que asegurar la pronta y eficaz satisfacción del interés general. Es por ello que la observancia de la regla del debido proceso adjetivo debe acentuarse aún más cuando el órgano administrativo resulta, al mismo tiempo, parte y juez dentro de una misma causa, pues en esa doble condición posee más información -inclusive de sus propios registros- que le facilita la constatación de las afirmaciones que efectúe el administrado. Por esa razón, el procedimiento administrativo recursivo debe ser abierto a prueba tanto cuando el órgano administrador lo crea necesario como cuando el administrado así lo solicita a fin de acreditar los hechos que invoca. Sólo así se garantiza su derecho de defensa, arribando a una mayor racionalización y eficacia de los trámites cumplidos, valorando las probanzas aportadas y conducentes para incursionar a fondo en la realidad económica analizada, primando así el principio de la verdad material o real, rector indiscutido de la labor fiscalizadora del





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

cumplimiento de las obligaciones tributarias en general (C.F.S.S., Sala II, in re “INGENIO RÍO GRANDE S.A. c/ D.G.I.” sent. 81407 del 31.10.00).

En efecto, los elementos que acompañan la presentación de la UATRE y OSPRERA en su denuncia, consisten únicamente en el acta de relevamiento de sus inspectores de los cuales no surge declaración alguna de parte de los trabajadores respecto de la relación que mantenían con la empresa o con la cooperativa. Por su parte la AFIP para determinar el cargo, sólo verificó la inscripción en las DDJJ y ante su ausencia convalidó la imputación formulada.

En este punto no resulta ocioso recordar que quien aduce una relación de trabajo -en el caso, el ente administrativo- es quien debe acreditarla y no a la inversa.

No obstante ello, corresponde verificar si de la prueba aportada se corroboran los extremos invocados.

En primer lugar, a fs. 333/334 de las actuaciones que corren por cuerda obra resolución del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, de fecha 28 de diciembre de 2001, registrada bajo el nro. 2741 que autorizó a funcionar como cooperativa a la entidad denominada Huentala Cooperativa de Trabajo Limitada, habilitación que mantuvo su validez la fecha de firma del contrato de locación de servicios agregado a fs. 105/106.

En segundo término, de la copia de la sentencia dictada en el marco del expediente nro. 32680/14 caratulado “Huentala Coop. de Trabajo Ltda. c/ PEN p/ Acción declarativa de Certeza”, del Juzgado Federal nro. 2 de Mendoza, que admitió la demanda incoada y, en consecuencia, determinó que no existe relación laboral entre los socios cooperativos de Huentala y las empresas que contratan sus servicios, surge que la asociación “celebro numerosos contratos de servicios cooperativos con distintas empresas...” y que nunca “fue infraccionada por las autoridades administrativas competentes en materia laboral, al igual que las empresas contratantes”, afirmación que fue ratificada por el juez que intervino y precisó que “se encuentra debidamente acreditado... el carácter cooperativo de los actos realizados por sus asociados con terceras empresas”.

Que en modo alguno la resolución enunciada resulta vinculante a los efectos aquí analizados, pero lo cierto es que allí se habrían verificado los aportes al sistema previsional en calidad de trabajadores autónomos de los asociados que no ha sido abordada en el sub examine.

En efecto, de la pericia contable obrante a fs. 357/358 el profesional concluye que de los registro de retenciones de Huentala, como así también de los recibos de asignaciones de los asociados relevados, se pudo observar que las retenciones que exige la ley en la materia se realizaron correctamente; que durante el período reclamado, los asociados percibieron sus anticipos de retorno por los servicios prestados, que si bien no pudo determinar su efectiva percepción, asume que ante la falta de reclamo fueron percibidos, no obstante sugiere se cite a las personas para que corroboren tal afirmación, propuesta que no fue considerada. Por ultimo acredita que la totalidad de las personas consignadas en las planillas poseen solicitud de admisión, registro y aprobación de su pedido, debidamente asentada en actas de reunión del consejo.

Por ello, frente a la imputación de un cargo -donde las garantías del administrado cobran especial relevancia y la menor duda debe ser siempre en su favor-, es el organismo quien debe demostrar la procedencia de aquél y, en tal cometido, agotar los medios a su alcance para lograrlo y aun cuando si bien es cierto que los desvíos incurridos en la contratación de las cooperativas de trabajo han llevado a apartarse -en muchas ocasiones- de los fines tenidos en cuenta para su habilitación, no basta para atribuir en la especie la relación de dependencia con la empresa Don Melquiades S.R.L. el retiro de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

autorización para funcionar como cooperativa y la referencia a un fallo en su contra que no se encuentra agregado ni debidamente referenciado.

Que en atención a los fundamentos expuestos, y de conformidad en lo pertinente con lo dictaminado por el Representante del Ministerio Público, el Tribunal **RESUELVE**: 1) declarar formalmente admisible el recurso deducido, hacer lugar al mismo y revocar la resolución determinativa de deuda; y 2) sin costas en la Alzada por no haber mediado sustanciación (art. 68 del C.P.C.C.N.).

Protocolícese, notifíquese, cúmplase con la comunicación dispuesta por la CSJN en la Acordada 15/13 (p.4 y conc.) y, oportunamente, remítase.

Se deja constancia que la Vocalía 1 se encuentra vacante (art. 109 del R.J.N.).

Fecha de firma: 20/04/2023

Alta en sistema: 03/05/2023

Firmado por: SEBASTIAN EDUARDO RUSSO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: FERNANDO STRASSER, JUEZ DE CAMARA - SUBROGANTE

Firmado por: JAVIER BENITO PICONE, SECRETARIO DE CAMARA



#27092035#362318343#20230419124309553